

**RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-037-2020-206
10-06-2020**

**EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y CONTROL SOCIAL**

CONSIDERANDO:

- Que**, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 61, numerales 2 y 5, dispone: “...*Participar en los asuntos de interés público...*” y “...*Fiscalizar los actos del poder público...*”;
- Que**, el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “...*La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad...*”;
- Que**, el artículo 95 de la Carta Magna, establece: “...*Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respecto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria...*”;
- Que**, la Norma Suprema, en su artículo 207, establece que: “...*El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la Ley...*”;
- Que**, el artículo 208, numerales 1 y 2, de la Constitución de la República del Ecuador establece como deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley, los siguientes: “...*Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción...*”; y, “...*Establecer mecanismos de rendición de cuentas*”;

de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social...”;

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 78, determina que: *“...Las veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones privadas que manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y por el Reglamento General de Veedurías...”;*

Que, el artículo 84 del mismo cuerpo legal, en relación a las veedurías ciudadanas, señala que: *“...Son modalidades de control social de la gestión de lo público y de seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas...”;*

Que, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 8, numerales 2 y 3, establece entre las atribuciones de esta Institución en lo relativo al control social, lo siguiente: *“...2. Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría, observatorios y demás espacios de control social, que así lo demanden, para exigir cuentas de la gestión de lo público, en el marco de los derechos constitucionales...”;* y, *“...3. Las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; la ejecución de planes, programas, proyecto, obras y servicios públicos...”;*

Que, el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, en su artículo 6, señala que: *“...Veedurías Ciudadanas.- Las Veedurías Ciudadanas constituyen mecanismos de control social que permiten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de participación para realizar el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su ejecución, con el fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público. Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre cualquier actividad de las funciones del Estado que afecten a la colectividad, salvo en aquellos casos en los que la publicidad de dichas actividades esté limitada por mandato constitucional o legal, o haya sido declarada como reservada...”;*

Que, el artículo 7 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, señala que: *“...Naturaleza. - Las veedurías constituyen entidades ciudadanas independientes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la entidad observada, o de cualquier otra institución de la administración pública; por tanto, no existe relación de dependencia laboral entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social u otra dependencia del Estado y los miembros de las veedurías ciudadanas. Las veedurías tienen carácter participativo, cívico, voluntario, proactivo y neutral y se realizarán sin perjuicio*

de la implementación de otro mecanismo de control social simultáneo diferente en la o las instituciones observadas...”;

Que, el artículo 8, ibidem, señala lo siguiente: *“...Ámbito territorial. - Podrán conformarse veedurías de carácter nacional, provincial o local, dependiendo del objeto de la veeduría o del ámbito de acción de la entidad observada...”;*

Que, el artículo 28 del mismo cuerpo legal, en lo relacionado al inicio del procedimiento indica que: *“... El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciará el procedimiento para la conformación de veedurías ciudadana por: a) Iniciativa ciudadana, individual o colectiva; b) Iniciativa del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; o, c) A solicitud de una autoridad, institución pública, y/o en virtud de mandato legal o reglamentario. No se podrá conformar más de una veeduría con el mismo objeto...”;*

Que, el primer inciso del artículo 39 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, en lo referente a los informes, señala: *“...Los veedores presentarán de forma obligatoria un informe final al término de la veeduría, e informes parciales en caso de ser requeridos por el CPCCS o a criterio de los veedores/as...”;*

Que, el artículo 40, ibidem, en relación a la Resolución del Pleno señala que: *“...El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitirá su resolución frente a las conclusiones y recomendaciones de los informes de la veeduría, y dispondrá se entregue los certificados de reconocimiento a los veedores por su participación en la veeduría...”;*

Que, mediante Memorando Nro. CPCCS-SNCS-2020-0013-M de 6 de enero de 2020, la Subcoordinación Nacional de Control Social, remite los informes de cierre técnicos provincial y nacional, de la veeduría ciudadana conformada para *“Fiscalizar el procedimiento especial de arrendamiento para el servicio de bares escolares para las instituciones educativas de sostenimiento fiscal: Unidad Educativa Distrito Metropolitano, Unidad Educativa Alfredo Pareja Diezcanseco, Unidad Educativa Dr. Carlos Rufino Marín, Unidad Educativa Eloy Alfaro, Unidad Educativa Hualcopo Duchicela, Unidad Educativa Medardo Alfaro, Unidad Educativa Ramón Moncayo Benítez, Unidad Educativa Rubén Darío, Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados, Unidad Educativa Villa Florida, pertenecientes a la Dirección Distrital 23d02-Educación, cantón Santo Domingo”;* y,

Que, mediante Memorando No. CPCCS-CGAJ-2020-0030-M, 13 de enero de 2020, el Coordinador General de Asesoría Jurídica, remite el informe jurídico de la referida veeduría ciudadana con las siguientes recomendaciones:

“4. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, esta Coordinación General Asesoría Jurídica, recomienda al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo siguiente:

1. Respecto a la **primera recomendación del Informe Técnico de Cierre** orientada a que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conozca el Informe de Cierre Técnico de la veeduría ciudadana, **esta Coordinación General de Asesoría Jurídica recomienda** acoger la misma.
2. Respecto a la **segunda recomendación del Informe Técnico de Cierre** que se refiere al cierre de la veeduría ciudadana, **esta Coordinación General de Asesoría Jurídica recomienda** al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acoger la misma, y disponer la terminación de la Veeduría Ciudadana y el archivo de la misma, de conformidad con el artículo 43, literal b) del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas”.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

RESUELVE:

- Art. 1.-** Dar por conocidas y acoger las recomendaciones constantes en el Informe de cierre Técnico Nacional de la Veeduría Ciudadana conformada para: **"Fiscalizar el procedimiento especial de arrendamiento para el servicio de bares escolares para las instituciones educativas de sostenimiento fiscal: Unidad Educativa Distrito Metropolitano, Unidad Educativa Alfredo Pareja Diezcanseco, Unidad Educativa Dr. Carlos Rufino Marín, Unidad Educativa Eloy Alfaro, Unidad Educativa Hualcopo Duchicela, Unidad Educativa Medardo Alfaro, Unidad Educativa Ramón Moncayo Benítez, Unidad Educativa Rubén Darío, Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados, Unidad Educativa Villa Florida, pertenecientes a la Dirección Distrital 23D02-Educación, cantón Santo Domingo"**; presentados mediante Memorando No. CPCCS-SNCS-2020-0013-M de 6 de enero de 2020, por la Subcoordinación Nacional de Control Social; así como, el Informe Jurídico presentado mediante Memorando CPCCS-CGAJ-2020-0030-M, 13 de enero de 2020, suscrito por el Coordinador General de Asesoría Jurídica.
- Art. 2.- Disponer** a la Secretaria General, remita copias del Informe de cierre técnico nacional, al Director Distrital de Educación 23D02 y al Ministerio de Educación.
- Art. 3.- Disponer** a la Secretaria General, se proceda al archivo de toda la documentación generada en este proceso.

DISPOSICIÓN FINAL. - Disponer a la Secretaría General, notifique con el contenido de la presente Resolución, con el Informe de Cierre Técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social, al Director Distrital de Educación 23D02 del Ministerio de Educación; y, a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención Ciudadana, para su publicación en el sitio web institucional del CPCCS. Finalmente, se notifique con el contenido de la presente Resolución a la Subcoordinación Nacional de Control Social y a la



Delegación Provincial del CPCCS en Santo Domingo de los Tsáchilas y a los
veedores para su conocimiento.

Dado en la plataforma digital elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 10 de junio del dos mil
veinte.

Ing. Christian Cruz Larrea
PRESIDENTE

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL CPCCS

**CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. -
SECRETARIA GENERAL.** - Certifico que la presente Resolución fue adoptada por
el Pleno del CPCCS, en Sesión Ordinaria No. 037, realizada el 10 de junio del 2020
de conformidad con los archivos correspondientes, a los cuales me remito.
CERTIFICO.

Dra. Guadalupe Lima Abázolo, MGET - MAET
SECRETARIA GENERAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL